

La presente resolución en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública

105-D-19

0000011

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las diez horas y cincuenta y cinco minutos del día siete de febrero de dos mil veinte.

Analizada la denuncia presentada por la señora [REDACTED] contra el licenciado José Fabio Jiménez Franco, Defensor Público de la Unidad de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la República, con la documentación que adjunta (fs. 1 a 10); en la cual señala los siguientes hechos:

i) El día catorce de mayo de dos mil diecinueve la denunciante recibió una notificación del Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, sobre una demanda interpuesta en su contra por la Sociedad Comercial Portillo, S.A. de .C.V., en relación a una deuda de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000), la cual manifiesta que no es real, por haberse utilizado una letra de cambio firmada en blanco por ella, como requisito para laborar en esa sociedad donde trabajó por diecinueve años. Además, la denunciante asegura que fue demandada, en razón de que ella interpuso un proceso laboral en contra de la mencionada sociedad, resultando favorable.

ii) El día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve la denunciante acudió a la Unidad de Derechos Reales y Personas de la Procuraduría General de la República, para solicitar ayuda, siendo asignado su proceso al licenciado José Fabio Jiménez Franco, quien tomó nota de la exposición de los hechos que ella le expresó y le manifestó que “contar con una letra de cambio era entrar al juzgado con los pies hinchados” (sic).

iii) El día veintinueve de junio de dos mil diecinueve, la denunciante se comunicó con el licenciado Jiménez Franco para consultarle sobre su caso y éste le manifestó que era mejor que ella fuera a las oficinas de la sociedad Portillo y llegar a un acuerdo con ellos para que ella retirara la demanda de lo laboral y que ellos retiraran la demanda de lo mercantil, lo cual no le pareció lógico.

iv) El día dos de julio de dos mil diecinueve la denunciante acudió a la Unidad de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría Auxiliar, para que le asignaran otro abogado pues no estaba conforme con las respuestas del licenciado Jiménez Franco, pero el Coordinador de esa Unidad le manifestó que el Juez de lo Civil de Quezaltepeque, departamento de La Libertad le había hecho un requerimiento al licenciado Jiménez Franco, el cual debía evacuar en tres días hábiles; sin embargo, dicho profesional no lo hizo, afectando de esta manera su proceso, ya que el juez dictó sentencia en su contra obligándola a pagar dicha cantidad.

Al respecto, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. 1. El poder sancionatorio que tiene este ente administrativo contralor de la ética en la Función Pública, ha sido habilitado constitucionalmente por el artículo 14 de la Constitución, siendo una potestad jurídicamente limitada por la ley, que constituye una de las facetas del poder punitivo del Estado.

De igual forma, el procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal tiene por objeto determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticas

reguladas en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y sancionar a los responsables de las mismas.

De esta manera, el ejercicio de las facultades y competencias de este Tribunal, es un reforzamiento de los compromisos adquiridos por el Estado a partir de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es así como el legislador, consciente de la importancia que el desempeño ético de la función pública reviste en un Estado de Derecho, estableció un catálogo de deberes que deben regir el actuar de todos aquellos que forman parte de la Administración Pública; además, de un listado de conductas que conforman materia prohibitiva para el proceder de estos sujetos.

2. Por otro lado, el artículo 81 letra b) del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental –RELEG– establece como causal de improcedencia de la denuncia o aviso que el hecho denunciado “*no constituya transgresión a las prohibiciones o deberes éticos*” regulados en los arts. 5, 6 y 7 de la Ley de Ética Gubernamental –LEG–.

Por lo que, toda conducta u omisión constitutiva de infracción administrativa debe estar descrita con claridad en una norma, por ende, la facultad sancionadora de esta institución se restringe únicamente a los hechos contrarios a los deberes y prohibiciones éticos regulados por la LEG, ya que la potestad sancionadora de la Administración Pública, es un poder que deriva del ordenamiento jurídico, encontrándose en la ley respectiva la delimitación de su ámbito de competencia.

El principio de *legalidad*, “[...] impone el actuar riguroso de la Administración conforme lo que estipule la ley en cuanto a la creación del catálogo predeterminado, claro y preciso de las infracciones penales y administrativas. Del mismo devienen dos principios que han adquirido una clara autonomía en esta sede, el de *reserva legal* y de *tipicidad*” (Sentencia del 29-IV-2013, Inc. 18-2008, Sala de lo Constitucional). La reserva legal obliga a los regímenes administrativos sancionatorios a que las limitaciones a derechos fundamentales deban realizarse únicamente mediante una ley formal –emanada de la Asamblea Legislativa–; lo que conlleva inevitablemente al respeto de la tipicidad, mediante la cual se configura la conducta regulada en la infracción administrativa, así como la sanción que corresponde a esta. La definición inequívoca de la materia de deber y prohibición es lo que permite a este Tribunal encajar los hechos planteados a una infracción determinada.

II. En el caso particular, la denunciante manifiesta su inconformidad con el desempeño del licenciado José Fabio Jiménez Franco, Defensor Público de la Unidad de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la República, en un proceso civil relacionado a una presunta deuda de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000) adquirida con la Sociedad Comercial Portillo, S.A. de .C.V, pues afirma que dicho defensor público omitió evacuar el requerimiento realizado por el Juzgado de lo Civil de Quezaltepeque, departamento de La Libertad, lo cual afectó su proceso, ya que el juez dictó sentencia en su contra y la obligó a pagar la cantidad antes relacionada; sin embargo, la conducta atribuida al mencionado servidor público revela aspectos vinculados a un incumplimiento o a la falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones propias del cargo por lo que dicha circunstancia no refleja una

posible transgresión a los deberes y prohibiciones éticas determinadas en los arts. 5, 6 y 7 de la LEG.

Es importante señalar que *"el principio de tipicidad como derivación del principio de legalidad en materia punitiva, impone el límite a la Administración que únicamente pueda sancionar a una persona cuando exista previamente un tipo administrativo que describa de manera certera una conducta considerada ilegal"* (Resolución pronunciada el 26-VI-2018 por el Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo en el proceso referencia 00011-18-ST-COPA-2CO); no obstante, en el presente caso, de los hechos descritos no se advierten contravenciones a la ética pública, pues las conductas señaladas no aportan elementos de una posible transgresión a los deberes y prohibiciones dentro de la tipificación delimitada por las referidas normas.

En suma, este ente administrativo no se encuentra facultado para revisar los hechos denunciados, pues de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la LEG, el procedimiento administrativo sancionador competencia de este Tribunal, tiene por objeto esencial determinar la existencia de infracciones a los deberes y prohibiciones éticas reguladas en ella, teniendo potestad sancionadora frente a los responsables de las contravenciones cometidas; siendo la finalidad perseguida combatir y erradicar todas aquellas prácticas que atentan contra la debida gestión de los asuntos públicos y que constituyen actos de corrupción dentro de la Administración Pública, no así las conductas descritas.

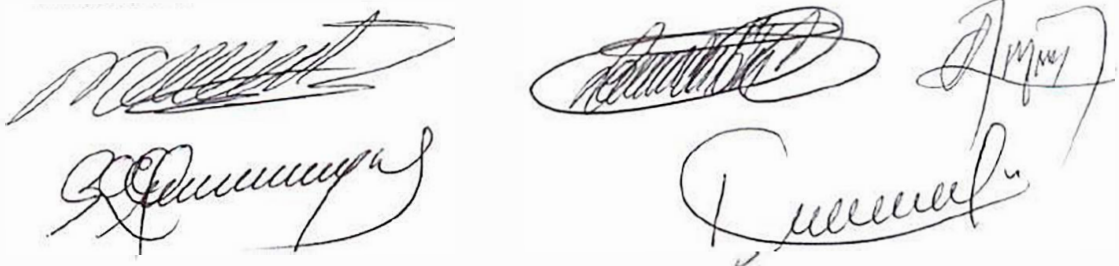
No obstante la imposibilidad por parte de este Tribunal de controlar las conductas señaladas, esto no significa una desprotección de los derechos que pudieran verse comprometidos, sino únicamente que deberán ser otras instancias las que, dentro de sus competencias, evalúen y determinen las responsabilidades que correspondan; pudiendo el denunciante, si así lo estima pertinente, avocarse a las mismas a fin de señalar lo ocurrido.

Por tanto, y con base en los artículos 1, 5 y 6 de la LEG y 81 letra b) de su Reglamento, este Tribunal **RESUELVE**:

a) *Declárase improcedente* la denuncia presentada por la señora [REDACTED] [REDACTED] contra el licenciado José Fabio Jiménez Franco, Defensor Público de la Unidad de Derechos Reales y Personales de la Procuraduría General de la República, por los motivos expresados en el considerando II de la presente resolución.

b) *Tiéndense* por señalados como lugar y medio técnico para oír notificaciones la dirección física y electrónica que constan al folio 3 del presente expediente.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

Co10/AM

